

N/REF: 0094/2022

El proyecto de orden tiene por objeto regular y abrir el procedimiento para el reconocimiento y acreditación como proyectos de interés singular para el Sistema de Formación Profesional de aquellos que, cumpliendo lo previsto en la misma, sean presentados por las empresas, organismos y entidades.

La justificación de esta regulación se encuentra en la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional que establece el marco jurídico básico y que tiene como uno de sus ejes prioritarios para alcanzar el éxito, la colaboración y participación en el desarrollo del sistema de las empresas, organismos y entidades que conforman el tejido productivo, económico y social del país.

En su artículo 3 apartado g) establece entre sus Principios la participación de las empresas y los agentes económicos y sociales en el diseño, desarrollo, evaluación e innovación de la formación profesional, asegurando el circuito de transferencia de conocimiento formación-empresa y el interés público.

En efecto, muchas empresas, organismos y entidades, en el ámbito de su responsabilidad social, hacen estudios y elaboran proyectos de formación, generalmente para sus propios trabajadores, que podrían servir de referente para acciones formativas llevadas a cabo por otras empresas e, incluso, por las administraciones lo que redundaría en una mejora sustancial del Sistema de Formación Profesional.

El proyecto de orden sometido a informe apoya la creación de un sistema de colaboración y participación de todos los agentes implicados en el Sistema de Formación Profesional, regulando, a través de un procedimiento para el reconocimiento y acreditación de sus proyectos para la mejora del Sistema de Formación Profesional.

En lo que a la materia de protección de datos personales se refiere, la norma a la que debe ajustarse el proyecto de Orden sometido a consulta es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD en lo sucesivo) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD en lo sucesivo).

El primer aspecto que debe analizarse es el relativo al ámbito subjetivo y el ámbito material de aplicación del RGPD y de la LOPDGDD aplicado al tratamiento de datos personales derivado de la aprobación y ejecución del proyecto de la orden sometida a informe.

Conviene indicar que el RGPD extiende su protección, tal y como establece su artículo 1.2, a los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales, definidos éstos en su artículo 4.1 como “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.”

Y en cuanto al tratamiento en sí mismo considerado, el artículo 4.2 del RGPD considera como «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;

II

En efecto, debe analizarse a quién o a qué va a afectar la aplicación de los preceptos de la orden sometida a informe, y, por tanto, cuáles y de quién van a ser los datos objeto de tratamiento, a los efectos de determinar si es de aplicación la normativa de protección de datos y en caso afirmativo, en qué medida o con qué intensidad debe aplicarse.

En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación y respecto a qué datos van a ser sometidos a tratamiento a raíz de la aplicación de la orden, debe acudir al artículo 3.1 del proyecto de orden bajo la denominación “requisitos y presentación de solicitudes” que:

Podrán presentar proyectos para su reconocimiento como de interés singular todas las empresas, organismos y entidades que deseen poner a disposición de otras empresas, organismo, entidades y administraciones públicas estos proyectos, sin perjuicio de mantener su autoría y propiedad intelectual, como instrumento para la mejora de la formación profesional.

Por su parte, en el Anexo I se refiere al modelo de solicitud de participación en el procedimiento que regula la orden, y se observa que se recogen datos de carácter personal, en concreto en el apartado “Datos de empresa, organismo o entidad” hay un espacio específico para “persona de contacto” y otro para “teléfono de contacto”.

Y en la parte final del Anexo I se establece un modelo de declaración con un apartado dónde se reserva un espacio para que el representante de la empresa, organismo o entidad, de forma manuscrita introduzca su nombre y apellidos, y finalmente firme el documento.

Por lo tanto, puede afirmarse que, de la ejecución de lo indicado en el proyecto de orden sometido a informe, va a producirse tratamiento de datos personales.

Teniendo en cuenta los preceptos y las indicaciones puestas de manifiesto, debe señalarse que el ámbito protector del RGPD también se extiende a las personas físicas que representan a las personas jurídicas, al no establecer ninguna exclusión en este sentido, pues sus datos personales deben ser tratados en las relaciones que aquellas establezcan con terceros.

En este sentido en el Informe 4/2021, se indicaba que “quedan excluidas de la aplicación de la normativa sobre datos personales las personas jurídicas, pero su ámbito protector se extiende a las personas físicas que las representan, cuyos datos personales deben ser tratados con sujeción a lo previsto en el RGPD y la LOPDGDD”.

De igual modo procede citar lo indicado en la LOPDGDD en su artículo 19 al analizar el tratamiento de los datos de personas que prestan servicios en personas jurídicas, en concreto al analizar la base jurídica que legitima el tratamiento de datos personales de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales, y que bajo el paraguas del apartado 6.1 f) del RGPD (la presunción de la concurrencia de interés legítimo) permite el tratamiento de los datos de contacto de éstos, únicamente para localización profesional y para entablar relaciones con la persona jurídica en la que el afectado preste su servicios.

En el caso que se plantea en la Orden sometida a informe, el órgano responsable de la tramitación del procedimiento de reconocimiento y la expedición de la acreditación de proyecto de interés singular, necesita lógicamente, realizar el tratamiento de datos personales de las personas físicas que representan a las personas jurídicas participantes en el citado procedimiento. Es decir, el órgano que tramite el procedimiento necesitará tratar esos datos para entablar relaciones (administración pública-administrado) con la persona jurídica en cuestión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio del análisis de la base jurídica que legitima el presente tratamiento, es preciso señalar que el artículo 19 de la LOPDGDD establece una presunción de interés legítimo que, no opera como base jurídica en este caso, ya que el artículo 6.1 RGPD excluye expresamente la concurrencia del interés legítimo para los tratamientos que se realicen por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, sin embargo es objeto de cita a efectos explicativos ya que la finalidad para la que se van a tratar los datos personales de los representantes de los organismos y entidades, coincide plenamente con las expresadas en el precepto, que no es otra que para ser identificados/localizados, y poder entablar los canales de comunicación necesarios en el procedimiento administrativo en cuestión y de las circunstancias que se deriven de la misma.

Por lo tanto, la primera conclusión que se obtiene es que, la recogida y uso, de los datos personales de los representantes de las entidades participantes se ha de considerar tratamiento de datos personales y por tanto someterse al RGPD y a la LOPDGDD.

III

El artículo 5 del RGPD recoge los “Principios relativos al tratamiento” al disponer lo siguiente:

1. Los datos personales serán:

- a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);
- b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);
- c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);
- d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);
- e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más

largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);

f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

En cuanto al principio de licitud, debe acudirse a lo indicado en el artículo 6 del RGPD y en concreto a lo dispuesto en el apartado 1 e) a cuyo tenor: 1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

El Considerando 45 del RGPD señala que “Cuando se realice en cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, o si es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, el tratamiento debe tener una base en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.”

Por su parte la LOPDGDD establece en su artículo 8.2 bajo la denominación Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos” dispone lo siguiente:

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.”

Teniendo en cuenta lo anterior, procede abordar la concurrencia del elemento del interés público en la regulación que es objeto de análisis.

Pues bien, la propuesta de norma apoya y posibilita alcanzar el principio general de participación de las empresas y los agentes económicos y sociales en el diseño, desarrollo, evaluación e innovación de la formación profesional, asegurando el circuito de transferencia de conocimiento formación-empresa y el

interés público, previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional.

La norma sirve, por tanto, a la necesidad de articular un Sistema de Formación Profesional entendido como un régimen de formación y acompañamiento profesionales, que sirva fortalecimiento y sostenibilidad de la economía, sea capaz de responder con flexibilidad a los intereses, las expectativas y las aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida y a las competencias demandadas por el mundo laboral.

El interés público se recoge expresamente en el apartado g) del citado precepto, al incluir como principio la:

g) Participación de las empresas y los agentes económicos y sociales en el diseño, desarrollo, evaluación e innovación de la formación profesional, asegurando el circuito de transferencia de conocimiento formación-empresa y el interés público.

Y en cuanto a la atribución legal de la competencia de acuerdo con el art. 8.2 LOPDGDD, debe partirse del propio artículo 149.1. 30ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

En el artículo 114 de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, en el apartado 1 letra h) se atribuye al Ministerio de Educación y Formación Profesional,

“cuantas otras competencias relativas a la ordenación, ejecución, gestión y coordinación que, no estando atribuidas a otros órganos, requieran la integridad y efectividad, en sus contenidos básicos, del Sistema de Formación Profesional”

En el presente supuesto, el procedimiento que regula la orden sometida a informe tiene por objeto, según la exposición de motivos, la promoción de actuaciones dirigidas a impulsar una “Formación Profesional de calidad, innovadora, inclusiva y excelente” sobre la base de materializar el contenido del principio establecido en el artículo 3.1 g) de la citada Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional.

En este sentido, el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales dispone en su artículo 8 apartado primero que corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional la

propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de formación profesional del sistema educativo y para el empleo.

Y el Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, establece en su artículo 5.3 que corresponde a la Secretaría General de Formación Profesional, entre otras, la competencia de la promoción de programas destinados a facilitar el desarrollo de la carrera profesional y el acceso a la cualificación y recualificación profesional.

Por lo tanto, la base jurídica que va a legitimar el tratamiento derivado de la ejecución de la orden sometida a informe es la prevista en el artículo 6.1 e) del RGPD, por resultar dicho tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público.

IV

En cuanto al principio de transparencia, previsto en el artículo 5.1 a) del RGPD junto con el de licitud que se acaba de analizar, conviene citar lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del RGPD.

Determina el artículo 12 del RGPD en su apartado 1, lo siguiente:

1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.

El artículo 12 del RGPD regula de qué modo o manera se debe proporcionar la información, es decir, qué características o cualidades debe tener la información que se ofrece a los titulares de los datos que van a ser objeto de tratamiento.

Determina el artículo 13 del RGPD en sus apartados 1 y 2, lo siguiente:

1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:

- a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;

- b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;
- c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;
- d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero;
- e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;
- f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.

2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:

- a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
- b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;
- c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;
- d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
- e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;

f) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

Como puede observarse, el precepto muestra el contenido material de la información. Es decir, qué elementos debe contener la información que se ofrezca al titular de los datos que van a ser objeto de tratamiento.

Por su parte, la LOPDGDD en su artículo 11, bajo la rúbrica “Transparencia e información al afectado” determina lo siguiente:

1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:

- a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
- b) La finalidad del tratamiento.
- c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

En efecto, el artículo 11 de la LOPDGDD, establece la posibilidad de instaurar un sistema de información por capas, diferenciando una primera información básica y permitiendo la remisión a otro espacio informativo dónde el interesado que lo desee pueda consultar con más amplitud todo lo relativo al tratamiento de sus datos personales.

Pues bien, en el Anexo I referido al modelo de solicitud para la participación en el procedimiento que regula el proyecto de orden, **no consta información**

alguna sobre protección de datos. En consecuencia, no se cumple el artículo 13 del RGPD.

Por lo que se informa desfavorablemente este aspecto y se propone que se incluya la información que requiere el precepto en su totalidad o utilizando la alternativa que propone el artículo 11 de la LOPDGDD referida al sistema de información por capas.

V

En cuanto al cumplimiento de los restantes principios recogidos en el artículo 5 del RGPD, debe hacerse especial referencia, además del principio de licitud y transparencia, al de limitación de la finalidad y de minimización de datos, recogidos en las letras b) y c), que indican que los “datos personales serán:

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);

Como se ha indicado antes, en la tramitación del procedimiento de reconocimiento y la expedición de la acreditación de proyectos de interés singular, se recogen datos personales de los representantes de las entidades participantes e incluso de personas de contacto que no tienen por qué coincidir con los anteriores.

Se desprende que la finalidad de la recogida de esta información es la tramitación del procedimiento administrativo en cuestión y en concreto la comunicación con las entidades interesadas.

El Considerando 39 del RGPD indica que “Los datos personales solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios.”

En consecuencia, y a los efectos de cumplir dicha finalidad de comunicación administración-interesados, en esta aspecto la regulación analizada se estima adecuada a los principio de limitación de finalidad y minimización de datos.

VI

Por último, hay que hacer referencia a lo dispuesto en el Artículo 12 del proyecto sometido a informe que bajo la denominación “Régimen de protección de datos”, establece lo siguiente:

Los datos de carácter personal recogidos en la solicitud formarán parte de un fichero de titularidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y quedarán sometidos a la protección establecida por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Teniendo en cuenta la redacción del precepto, conviene indicar que una de las novedades del RGPD, es que la noción de “fichero” ya no es uno de los elementos clave del sistema de protección de datos, ya no puede ser considerada como piedra angular del sistema, que venía a determinar por su mera existencia la aplicación de la normativa y otorgaba una posición relevante a determinados intervinientes en el tratamiento de datos como era el “responsable del fichero” y suponía el sometimiento al régimen sancionador previsto en la hoy derogada LOPD de 1999 (Artículo 43).

Ahora la regulación se centra principalmente en el “tratamiento” como eje fundamental en la normativa de protección de datos.

La pérdida de relevancia de dicho elemento, la encontramos, por ejemplo, en el Capítulo IV del RGPD, bajo la denominación “Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento” únicamente se regulan estas figuras junto con los supuestos de corresponsabilidad. Es decir, ha desaparecido la figura del responsable del fichero, como tampoco aparece en las definiciones del artículo 4 como si lo hace el responsable y el encargado.

Asimismo, otra muestra de la pérdida de relevancia del fichero como elemento en protección de datos, se observa con la desaparición de la obligación de inscribir el fichero en el extinto Registro General de Ficheros de la AEPD que ha sido suprimida de la actual normativa, pudiendo entenderse sustituido por la obligación de disponer de un Registro de Actividades del Tratamiento, en los supuestos previstos en el artículo 30 del RGPD y artículo 31 de la LOPDGDD.

En la actualidad, la noción de fichero la encontramos en el RGPD, únicamente, en el apartado de definiciones (artículo 4.6) y como elemento de aplicación material del reglamento, cuando estemos ante el tratamiento no automatizado de datos personales que estén “contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero” (artículo 2.1).

Es decir, resulta obvio la aplicación residual del concepto del fichero en la vigente normativa de protección de datos, en comparación con el régimen jurídico que se derivaba de la Directiva 95/46/CE.

En consecuencia, **la redacción del precepto en lo que se refiere a este aspecto ha de considerarse obsoleta pues parece obedecer a la anterior regulación, al indicar “fichero titularidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional”, a pesar de no hacerlo expresamente, está utilizando implícitamente el concepto de “responsable del fichero” que hoy en día no consta ni en el RGPD ni en la LOPDGDD.**

Por lo que se propone su eliminación.

Asimismo debe recordarse que, teniendo en cuenta el sistema de jerarquía de fuentes del derecho, la norma reguladora del tratamiento de datos personales en nuestro ordenamiento jurídico es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, por lo que si se hace una remisión a la normativa de protección de datos, debe ser con carácter general a esta norma, sin perjuicio de que se añada también la LOPDGDD, que complementa dicha regulación.

En consecuencia, se propone que se modifique el artículo 12 del proyecto y se sustituya por el siguiente texto:

El tratamiento de datos de carácter personal derivado de la aplicación de la presente orden quedará sometido a la protección establecida en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.